

University of Dundee

Declaración de Buenos Aires sobre Inversiones Internacionales, Sustentabilidad Ecológica y Derechos Humanos

Bas Vilizzio, Magdalena; Cazalbón, Astrid; Droubi, Sufyan; Echaide, Javier; Ghiotto, Luciana; Guamán, Adoración

Publication date:
2019

Document Version
Other version

[Link to publication in Discovery Research Portal](#)

Citation for published version (APA):

Bas Vilizzio, M., Cazalbón, A., Droubi, S., Echaide, J., Ghiotto, L., Guamán, A., Gutiérrez Haces, T., Heffron, R., Morosini Costa, F., Ocantos, A., & Ross, A. (2019, Jul 26). Declaración de Buenos Aires sobre Inversiones Internacionales, Sustentabilidad Ecológica y Derechos Humanos.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in Discovery Research Portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from Discovery Research Portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.



IILA Net

**Red de Inversiones Internacionales en América
Latina**

International Investments in Latin America
Network

Declaración de Buenos Aires sobre Inversiones Internacionales, Sustentabilidad Ecológica y Derechos Humanos

Buenos Aires Statement on
International Investments, Ecological Sustainability and Human Rights

Los académicos y académicas reunidos en el taller **Inversiones extranjeras y sustentabilidad ecológica** en la Ciudad de Buenos Aires los días 25 y 26 de julio, queremos llamar la atención de la sociedad civil, la academia y los gobiernos sobre los puntos siguientes.

1. El agotamiento de los ecosistemas es un problema y no puede ser negado. Esto tiene implicaciones sobre todas las áreas de la vida.
2. Para dar cuenta de esta problemática, generalmente se utiliza un enfoque sobre desarrollo sustentable basado en tres pilares (económico, social y medioambiental), pero se suele enfatizar la economía sobre los otros pilares, perpetuando así la toma de decisiones y políticas a corto plazo. Este enfoque sobre desarrollo sustentable no está produciendo las transformaciones necesarias para hacer frente a los retos que el mundo, y en particular América Latina, enfrentan.
3. Proponemos que todo desarrollo debe ser sustentable y que la sustentabilidad ecológica, entendida como la protección de la integridad o la capacidad de carga de los ecosistemas, sea un principio normativo fundamental del desarrollo sustentable. No podemos acceder a la igualdad, libertad u otros derechos humanos sin sustentabilidad ecológica. Para que el desarrollo sustentable sea efectivo, este debe ser compatible con la protección de la naturaleza y los derechos humanos.
4. Entendemos que existe una tensión entre el sistema de protección de inversiones y la sustentabilidad ecológica, cuyos principios han sido ignorados por el modo en que se ha desarrollado el comercio y la inversión. El sistema de protección de inversiones, por su propia naturaleza, restringe la capacidad regulatoria de los Estados y no permite el despliegue de políticas que vayan en pos de la sustentabilidad. Esa posible colisión de intereses puede generar parálisis o congelamiento normativo.
5. Los Estados, especialmente en el Sur Global, deben recuperar espacio para regular. Sin embargo, esta recuperación debe ser parte de una estrategia más amplia que involucre también a la sociedad civil en la definición e implementación de las políticas públicas.
6. En América Latina, la mayoría de las demandas mediante el mecanismo inversor-Estado contenido en los Tratados de Inversión y los Tratados de Libre Comercio, están relacionadas con la explotación de recursos naturales, especialmente en los sectores de minería e hidrocarburos. Esto está generando un enorme gasto para los Estados, tanto en las demandas perdidas como en los mismos procesos arbitrales, que tardan años y que conllevan gastos extraordinarios en la defensa. Esto muestra la urgencia de promover los cambios que proponemos.
7. El mecanismo de demanda inversor-Estado agrava la impunidad de la que gozan las empresas transnacionales por cometer crímenes o abusos contra los derechos humanos y de la naturaleza. Debe reconocerse que las empresas tienen obligaciones en derechos humanos y en la protección del ambiente. En los tratados con provisión de inversiones, existe un desequilibrio en favor de las empresas dado que se les conceden derechos pero no se les imponen obligaciones. Sostenemos que las empresas tienen la obligación de invertir en técnicas sostenibles de producción que contribuyan al mejoramiento de la vida de las comunidades y del ambiente.
8. Algunos marcos normativos nacionales en países latinoamericanos han tomado a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto implica un giro desde el antropocentrismo a una visión que pone a la naturaleza como centro de derechos, lo cual implica un cambio de paradigma. Esto

se evidencia en 2009 en la nueva Constitución de Ecuador, que posee un fuerte rasgo anti-corporativo propio del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Promovemos que otros países, principalmente en el Sur Global, avancen en ese sentido.

9. Subrayamos el énfasis que al Acuerdo de París otorga al principio de la transición justa. Desde los Acuerdos de París, la noción de transición justa ha ampliado su alcance. Esto es, la transición hacia una economía de baja emisión de carbono debe incluir los elementos centrales de justicia, como justicia distributiva, participación en la toma de decisiones y debido proceso legal. Observamos que el régimen de protección de inversiones limita la posibilidad de que los Estados avancen en ese sentido. Existen numerosos casos a nivel global que muestran que el otorgamiento de derechos extraordinarios a los inversores de las energías tradicionales les posibilita demandar a los Estados cuando estos implementan políticas en pos de las energías limpias.
10. Enfatizamos el rol de la sociedad civil en este debate. La sociedad civil puede colaborar en clarificar conceptos como el de sustentabilidad ecológica y transición justa, especialmente desde la perspectiva de su práctica. En este sentido, es vital el acceso a la información y la participación social en la toma de decisiones. Promovemos el derecho a la consulta vinculante de los posibles afectados, en particular los pueblos originarios.

Buenos Aires, 26 de julio de 2019.

Magdalena Bas Vilizzio, Universidad de la República, Uruguay

Astrid Cazalbón, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Brasil

Sufyan Droubi, University of Dundee, Scotland

Javier Echaide, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Luciana Ghiotto, Universidad Nacional de San Martín, Argentina

Adoración Guamán, Universidad de Valencia, España y FLACSO Ecuador

Teresa Gutiérrez Haces, Universidad Nacional Autónoma de México, México

Raphael Heffron, University of Dundee, Scotland

Fabio Morosini Costa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Ariel Ocantos, Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Andrea Ross, University of Dundee, Scotland

Las posiciones y conceptos emitidos anteriormente son responsabilidad exclusiva de sus autores y no expresan la opinión de sus respectivas instituciones.

The academics present at the workshop **International Investments and Ecological Sustainability** in the City of Buenos Aires on July 25 and 26 want to call the attention of civil society, academia and governments to the following points.

1. The depletion of ecosystems is a problem and cannot be denied. This has implications on all areas of life.
2. The popular three-pillar approach to sustainable development (economy, social and environment) often emphasises the economy over the other pillars and perpetuates short-term business as usual decision and policy-making. This approach to sustainable development is not delivering the transformative change needed to address the challenges that Latin America and the world currently faces.
3. We propose that all development must be sustainable development and ecological sustainability, understood as the protection of the integrity or of the carrying capacity of ecosystems, is a fundamental normative principle underpinning sustainable development. We cannot access equality, freedom or other human rights without ecological sustainability. For sustainable development to be effective, it must be compatible with both the protection of nature and the protection of human rights.
4. We understand that there is a tension between the investment protection system and ecological sustainability, whose principles have been ignored by the manners in which trade and investment have developed. The investment protection system, by its very nature, restricts the regulatory capacity of States and does not allow the deployment of policies that pursue sustainable development. This possible collision of interests can generate paralysis or regulatory freezing.
5. States, especially in the Global South, must recover space to regulate. However, this recovery must be part of a broader strategy that also involves civil society in the definition and implementation of public policies.
6. In Latin America, most of the demands brought within the investment-State mechanism contained in Investment Treaties and Free Trade Agreements, are related to the exploitation of natural resources, especially in the mining and hydrocarbons sectors. This is generating huge costs for States, both in terms of lost claims and of arbitration proceedings themselves, which take years and entail extraordinary expenses. This shows the urgency of promoting the changes we propose.
7. The investor-state dispute mechanism aggravates the impunity enjoyed by transnational corporations when committing crimes or abuses against human rights and the nature. It must be recognized that companies have obligations in human rights and environmental protection. In treaties with investments provisions, there is an imbalance in favour of companies since they are granted rights but no obligations are imposed on them. We maintain that companies have an obligation to invest in sustainable production techniques that contribute to the improvement of community life and the environment.
8. Some national regulatory frameworks in Latin American countries have taken nature as a subject of rights. This implies a shift from anthropocentrism to a vision that puts nature as a subject of rights, which implies a paradigm shift. This is evidenced in 2009 in the new Constitution of Ecuador, which has a strong anti-corporate feature typical of the new Latin

American constitutionalism. We propose that other countries, mainly in the Global South, advance in this direction.

9. We underline the emphasis that the Paris Agreement places on just transition. Since the Paris Agreement, however, the notion of fair transition has expanded its scope. That is, the transition to a low carbon economy should include the central elements of justice, such as distributive justice, participation in decision-making and due process of law. We note that the investment protection regime restricts the possibility for states to move forward in this direction. There are numerous cases at a global level that show that granting extraordinary rights to investors of traditional energy enables them to sue states when they implement policies for clean energy.
10. We emphasize the role of civil society in this debate. Civil society can collaborate in clarifying concepts such as ecological sustainability and fair transition, especially from the viewpoint of their practice. In this sense, access to information and social participation in decision making is vital. We promote the right to binding consultation of those affected, in particular the native peoples.

Buenos Aires, July 26, 2019.

Magdalena Bas Vilizzio, Universidad de la República, Uruguay

Astrid Cazalbón, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Brasil

Sufyan Droubi, University of Dundee, Scotland

Javier Echaide, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Luciana Ghiotto, Universidad Nacional de San Martín, Argentina

Adoración Guamán, Universidad de Valencia, España y FLACSO Ecuador

Teresa Gutiérrez Haces, Universidad Nacional Autónoma de México, México

Raphael Heffron, University of Dundee, Scotland

Fabio Morosini Costa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Ariel Ocantos, Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Andrea Ross, University of Dundee, Scotland

The positions and concepts emitted above are the sole responsibility of their authors and do not express the opinion of their respective institutions.